

Aprendizajes para la mercadotecnia política desde la econometría espacial: El discurso anticorrupción en 2018

Jorge Pablo Rivas Díaz¹

Raúl Alberto Méndez Nájera²

Resumen

En la presente investigación se muestra un análisis del impacto del discurso político contra la corrupción durante la elección presidencial de 2018 en México, logrado mediante la evaluación y modelado econométrico espacial de las preferencias electorales reveladas durante la jornada electoral como producto de la percepción de la corrupción y la confianza de los votantes en las principales instituciones políticas y de gobierno en las diferentes entidades federativas del país, permitiendo la mejor comprensión del dónde y en qué medida dicho discurso impulsó el triunfo de la coalición encabezada por Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

Conceptos clave: Mercadotecnia política, Elección pública, Econometría Espacial

Introducción

El objetivo de la investigación es analizar y estimar el impacto del discurso político como herramienta para la obtención de resultados electorales, permitiendo la comprensión de la efectividad de los mensajes políticos como producto del mensaje mismo y de las condiciones y percepciones sociales plenamente identificables en el territorio sujeto al proceso de elección pública, ocupando la herramienta del modelado econométrico espacial y el análisis de las condiciones históricas concretas del electorado y su entorno.

La investigación se centra en el caso del discurso anticorrupción de Andrés Manuel López Obrador (AMLO) durante la elección presidencial de México durante el año 2018, esto se justifica en el hecho de que dichos resultados electorales se han caracterizado como una victoria histórica en donde se logró una asistencia récord de participación en las votaciones federales, con más de 56 millones de votos ejercidos y donde más del 52.9% de los votos totales respaldaron el triunfo de AMLO (INE, 2018), quien durante todo el año 2019 mantuvo uno de los niveles más altos de aprobación ciudadana de la historia desde que se evalúa el indicador, alcanzando entre el 83% y el 71% de aprobación, dependiendo las encuestas y el mes de realización de las mismas (Forbes, Junio-2019).

Se parte de la hipótesis acerca de que, existe una relación positiva entre un discurso político asertivo y la obtención de resultados electorales favorables, en donde el discurso cobra relevancia en la elección, si y solo si, confronta una necesidad o un deseo predominante en una región electoral específica, logrando impactos regionalizados derivados de cada temática discursiva. Esto significa, que, en el caso del discurso anticorrupción de AMLO, la magnitud de su impacto fue mayor en las distintas entidades federativas y regiones donde la

1 Doctor en Economía, Facultad de Economía y Negocios, Universidad Anáhuac México, jorge_p_rivas@live.com.mx

2 Licenciado en Economía, Facultad de Economía, Universidad Nacional Autónoma de México, albertomn75@gmail.com

percepción respecto a la corrupción fue mayor y la confianza de los electores respecto a los actores políticos tradicionales fue menor durante los años y meses previos a la jornada electoral.

Para probar dicho argumento se ha planteado responder las siguientes preguntas de investigación:

- ¿Cuáles fueron las principales características que formaron la percepción social de la corrupción y de confianza institucional previo a las elecciones de 2018 en México a nivel nacional y regional?
- ¿Es posible demostrar correlación y causalidad entre la percepción de la corrupción, la confianza institucional y los resultados electorales de la elección presidencial de 2018 en las distintas regiones del país?

El estudio se articula en tres apartados principales:

El primero, presenta una breve revisión de literatura relevante para la investigación, ofreciendo un contexto analítico acerca de la vinculación entre Estado, el gobierno, la democracia y la elección pública.

El segundo, expone el contexto nacional previo al proceso electoral de 2018, es decir, las tendencias del ejercicio democrático en periodos anteriores, el contexto heterogéneo de deterioro en la percepción de la corrupción y la confianza en las autoridades políticas e institucionales en el país y las entidades federativas.

El tercero, presenta los principales resultados del análisis del discurso anticorrupción en las entidades federativas, respondiendo a la interrogante acerca de si existe correlación y causalidad, tal que permita argumentar que a una mayor percepción de la corrupción y mayor desconfianza en las instituciones políticas y gubernamentales tradicionales el discurso anticorrupción cobró mayor fuerza en la preferencia electoral.

El caso de estudio se presenta a manera de una síntesis de aprendizajes el apoyo a la mercadotécnica política desde el enfoque de la econometría espacial y el análisis regionalizado.

1. El Gobierno, la democracia y la elección pública

El punto de partida para el análisis del proceso de elección pública y la vida democrática del país es necesariamente el del encadenamiento conceptual entre el Estado, el gobierno, la democracia y sus procesos electorales, desde sus definiciones, funciones y mecanismos.

El Estado puede ser entendido desde múltiples perspectivas de análisis, donde la ciencia política cuenta con una literatura extensa sobre el tema. La riqueza del debate conceptual acerca de este se puede articular desde cinco enfoques principales, es decir:

- a) Desde la teoría del contrato social (Hobbes, Locke y Rosseau) donde se entiende que el Estado es producto del acuerdo impulsivo entre individuos por el bien común

- b) El posicionamiento de Max Weber, donde la asociación también implica la superposición y dominación de intereses entre grupos sociales
- c) La perspectiva de Hegel acerca del Estado como dimensión social y campo de batalla entre intereses privados, donde los funcionarios del Estado cobran relevancia idealizada.
- d) El enfoque Marxista-Leninista donde el Estado es entendido como un aparato gubernamental, administrativo, burocráticos y correctivo donde las instituciones se encuentran separadas de las necesidades principales de la masa social.
- e) Los posicionamientos mixtos como los de Gramsci, Oppenheimer y Krader quienes retoman elementos de las cuatro anteriores, flexibilizando el concepto de Estado como organización gubernamental y asociación política a la par que existe subordinación y cohesión social.

Desde una aproximación amplia y sobre todo integrativa para interpretaciones actuales, se debe entender al Estado como un órgano de poder político, de dirección y de gobierno, extendido sobre un determinado territorio y una comunidad nacional, donde si bien, existen relaciones de subordinación estructuralmente determinadas, este Estado y sus Instituciones deben reconstruirse de manera continua en sus formas de organización y representación conforme se presentan las transformaciones propias de la sociedad de acuerdo con su realidad histórico-concreta (Rivas, 2012: pág. 41).

Esta perspectiva permite entender que el Estado y las distintas instituciones mediante las cuales articula su gobierno se sujetan a las necesidades cambiantes de la sociedad y los balances de poder entre sus distintos grupos de interés, donde el tiempo y el espacio son de gran relevancia para identificar los posibles acuerdos que puedan surgir entre grupos respecto a sus intereses de carácter privado, público y como comunidad.

En este contexto, la configuración del poder y la dirección del gobierno en los Estados nacionales, basados en autoridades políticas electas mediante el voto directo de la población resultan especialmente dependientes de la percepción que los distintos grupos de interés que predominan en la sociedad pueden tener en un momento dado respecto a sus logros pasados, sus acciones y prioridades presentes y su capacidad futura para enfrentar los retos que avocinan a la sociedad.

Es necesario poner por delante este hecho, en tanto que la totalidad nacional es estructuralmente desigual, es decir que consiste en un mosaico heterogéneo de realidades regionales diversas, tanto por sus condiciones económicas, sociales, políticas, e incluso ambientales, que conllevan a que la configuración de patrones de decisión distintos en cada región de cada país de acuerdo con su propia realidad.

Las democracias políticas modernas son entendidas como “sistemas y regímenes políticos en los que el pueblo manda” (Sartori, 1993:13), es decir, estructuras complejas donde el gobierno representa “el poder popular” y donde adicionalmente, “los ciudadanos pueden llamar a cuentas a los gobernantes por sus actos en el dominio público, a través de la competencia y cooperación de sus representantes electos” (Crespo, 2016: 14), siendo por tanto, sistemas caracterizados por la necesidad de renovar de manera continua la forma de impactar objetivamente en la satisfacción de las necesidades y las percepciones subjetivas de la población con capacidad legal para participar de la elección pública.

De esta manera el Gobierno es validado mediante el ejercicio democrático del voto y donde este último se debe a múltiples factores, tanto objetivos como subjetivos, como sus condiciones de vida, de ingreso, empleo y salud, entre otros y hasta sus percepciones acerca de fenómenos complejos como la inseguridad, la confianza en la autoridad y el sistema de normas y agentes integrantes del gobierno, el nivel de corrupción y su arraigo en el territorio y las organizaciones políticas.

El triunfo de los grupos de poder político en la obtención del voto depende de manera directa de su trabajo territorial con la masa de votantes, la calidad y cantidad de su comunicación con ellos y su capacidad para motivarles para que estos se integren al proceso político y expresen su preferencia electoral de manera positiva, de manera que los mensajes son valiosos, tanto como las vías para comunicarlos y el contexto en el que el votante se apropia de las ideas centrales de la plataforma política de los grupos en búsqueda por el poder de decisión del gobierno.

2. El contexto nacional previo a la elección de 2018

El contexto histórico concreto en el que se desarrolla la elección presidencial de 2018 se puede dividir en tres componentes principales para los fines de la investigación:

1) En las condiciones y tendencias de la participación de la sociedad en los procesos electorales y su creciente apatía por la desconfianza en los procesos electorales y sobre todo en las autoridades políticas surgidas de dichos procesos,

2) En el progreso de la percepción de la corrupción a nivel nacional y el malestar e inconformidad social que esto genera y

3) La heterogeneidad regionalizada de la percepción de la corrupción de acuerdo con la persecución y castigo de casos de corrupción de gran impacto y de estructuras de gobierno locales en distintas regiones del país.

2.1. La tendencia de la participación y el abstencionismo

El ejercicio de la democracia ha sido un tema de debate complejo, sobre todo en México al ser una democracia relativamente reciente, donde las instituciones político-electorales obedecen a intereses diversos, en ocasiones ocultos y difíciles de comprender para la masa heterogénea de votantes y sus propios intereses locales y nacionales, y donde se cuenta con una dinámica inercial hacia la costumbre histórica del corporativismo y la figura del liderazgo caciquil arraigado desde la revolución mexicana.

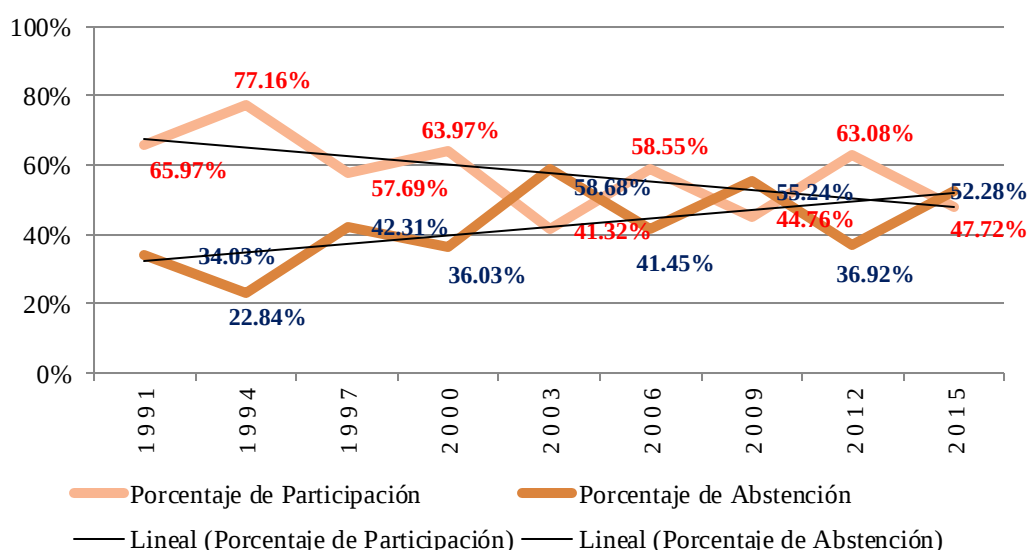
Algunas perspectivas de análisis señalan que la historia reciente del país en cuanto a su dinámica de su régimen político ha sido especialmente estrepitosa, pues ha pasado por transiciones que la han llevado desde la estabilidad y el desarrollo, hasta la crisis económica y social y la correspondiente explosión de inconformidad de la población respecto a las estrategias de su gobierno para representar sus intereses desde lo local, lo regional y lo nacional.

La diversidad de ideas deriva en diversidad de enfoques de análisis, no obstante, el enfoque predominante actualmente, argumenta que, durante las últimas décadas, México “ha

atravesado por un cambio de régimen. ... luego de vivir bajo un sistema autoritario” (Mirón, 2011), atravesando problemas de debilitamiento del Estado, pérdida de legitimidad política y representatividad (1968), donde los malestares y ajustes económicos de las décadas de 1970 y 1980 hasta el agotamiento del régimen del partido dominante y una alternancia en el poder político por los partidos de oposición para el año 2000, que terminó siendo una alternancia incompleta, que terminó levantándose como una transición ineficiente, incapaz de combatir los problemas de la desigualdad y la inseguridad, que se vio caracterizada también por una incipiente transparencia de los asuntos públicos.

Desde 1991, en dicho contexto, la evolución del ejercicio democrático ha experimentado cambios institucionales, se vio fortalecido presupuestalmente el sistema electoral y las instituciones enfocadas por “salvaguardar” la legitimidad del voto, surgieron y colapsaron partidos políticos y programas de gobierno (Ayala, 2015). No obstante, la tasa de participación de los votantes a nivel nacional en elecciones federales presentó un deterioro gradual durante las últimas tres décadas a la par que la tasa de abstención había ido al alza (Gráfica 1).

Gráfica 1. Participación social y Abstencionismo/ Estructura porcentual (1991-2015)



Fuente: Retomado de Rivas y Buendía (2017b) con datos del Instituto Nacional Electoral

El ciclo del porcentaje de la participación del electorado entre elecciones intermedias y presidenciales muestra que no existe un pleno interés de la población en participar del ejercicio democrático en todas sus expresiones y en todos sus ejercicios, aunque de ello dependa la estrategia del desarrollo nacional y el logro de sus metas intermedias, mostrando un diferencial de más de 10 puntos porcentuales de participación cuando la elección se asocia a la elección del liderazgo del poder ejecutivo federal.

Por otra parte, la tendencia a la baja promedio en la participación en elecciones federales a la par del incremento del abstencionismo muestra un claro y gradual deterioro

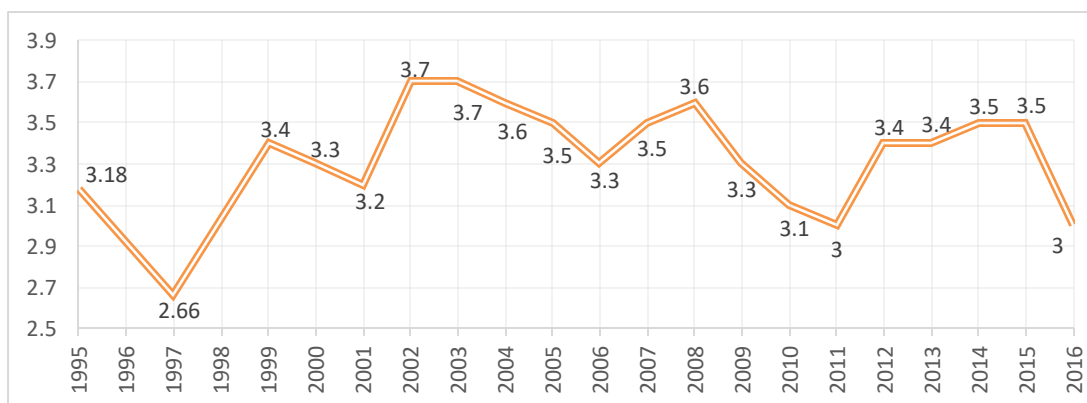
del interés del votante desde las elecciones de 1994 y hasta la elección de 2015 (previa a 2018) causado principalmente por la caída de la confianza del votante en el proceso electoral como instrumento de cambio en las directrices y tendencias del accionar del gobierno, en donde a pesar del cambio de los grupos políticos en el poder, durante la última década del siglo XX y la primera del siglo XXI, la tendencia y ejes rectores de la política económica mantuvieron la misma ruta y estrategias de trabajo planteadas desde las directrices de los organismos internacionales de cooperación y desarrollo económico, la apertura comercial, el equilibrio fiscal y por tanto la caída gradual de la soberanía de sectores estratégicos en favor de los competidores internacionales más eficientes, siendo en la percepción pública “más de lo mismo”.

2.2. La percepción de la corrupción y la confianza en las instituciones.

A la par de la contracción del entusiasmo de la población por la efectividad de su voto durante los ejercicios de votación federales, como herramienta de redireccionamiento de las estrategias gubernamentales, los principales indicadores asociados a la percepción social de la corrupción en el país mostraron un progreso gradual y unas expectativas cada vez peores entre la población, en donde predominó el creciente deterioro de la imagen de la clase política, el entorno de corrupción en la economía y las labores de gobierno.

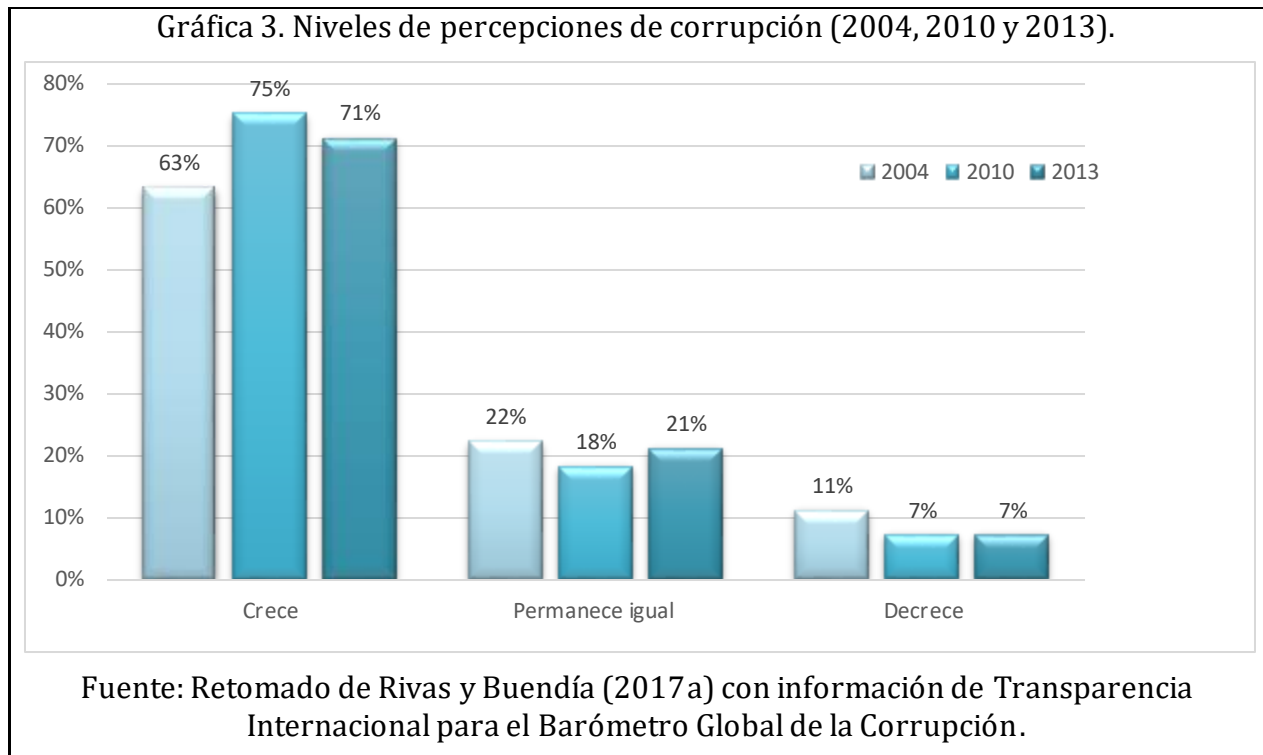
En cuanto a la transparencia en la gestión del gobierno y la proliferación de la corrupción evaluada desde fuera, los resultados de estimaciones realizadas por Transparencia Internacional (TI, 2014-2017) y el Banco Mundial (BM, 2014-2017), permitían mostrar mediante instrumentos comparativos internacionales que México se situó por debajo de la media mundial en materia de transparencia, confianza en los gobiernos y combate a la corrupción independientemente del grupo político en el poder, llegando a ser evaluado como uno de los países más corruptos del planeta, alcanzando una calificación promedio de 3.3 sobre 10 entre 1995 y 2016 respecto al Índice de Percepción de la Corrupción (IPC) de Transparencia Internacional (Gráfica 2), donde a la par que mantuvo una pésima evaluación vio retrocesos en dicho indicador, llegando incluso a caer 28 lugares en el ranking internacional tan sólo entre los años 2015 y 2016.

Gráfica 2. Índice de percepción de la Corrupción



Fuente: Retomado de Rivas y Buendía (2017a) con información de Transparencia Internacional para el Índice de percepción de la Corrupción.

La corrupción vista desde dentro también presentó progresos negativos, pues los niveles de percepción de la corrupción de la sociedad mexicana evaluadas mediante el Barómetro Global de la Corrupción (BGC) mostraron un deterioro gradual, donde entre el año 2004 y 2013 no solo se incrementó su magnitud, sino que la sociedad en general mantenía expectativas negativas sobre el progreso de la misma, donde más del 70% de la población mantenía la creencia de que “lejos de mejorar empeoraría” la corrupción en el país (Gráfica 3).



Entre los años 2014 y 2018 el entorno nacional e internacional de las tecnologías de la información y la comunicación facilitaron el acercamiento de la idea del combate a la corrupción como una necesidad de la sociedad para frenar la desigualdad y polarización y el abuso de agentes económicos privilegiados en contra de la dinámica económica de la comunidad.

La campaña de Transparencia Internacional "Unmask the Corrupt" (2015-2016), visualizó internacionalmente actos de corrupción de alto impacto en todo el mundo, donde desde funcionarios y exfuncionarios públicos, figuras públicas del deporte y el espectáculo, fundaciones de la sociedad civil, empresas internacionales e instituciones financieras internacionales fueron evidenciadas por distintos tipos de actos de corrupción que iban desde el robo, la malversación y desvío de fondos, enriquecimiento ilícito, lavado de dinero y hasta corrupción sistémica de los gobiernos (Méndez, 2020).

En México, a pesar de los cambios del poder ejecutivo federal entre el PRI y el PAN (1995-2018) se dio continuidad de políticas sobre los mismos supuestos económicos asociados a la agenda de gobierno del Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, promoviendo libre mercado y contracción de la actividad del Estado en el direccionamiento

del desarrollo lo que terminó por acentuar la percepción social acerca de la proliferación de pactos entre los distintos grupos políticos dirigidos con una “incipiente transparencia de los asuntos públicos...con elevados niveles de pobreza y desempleo”, donde “la corrupción continuaría acompañando al ejercicio del poder, sin distingos de partidos y colores” (Huchim, 2015: 41).

La idea entre el electorado mexicano acerca de que la corrupción se había vuelto algo “normal y natural en la actividad política, particularmente en el servicio público y en los partidos políticos” (Fernández, 2015: 23) se acentuó y se trató cada vez con mayor desagrado, sobre todo ante la proliferación de numerosos casos de corrupción perpetuados por autoridades a todos los niveles de gobierno, desde desvío de recursos, enriquecimiento ilícito o defraudación fiscal.

El escándalo de “La Casa Blanca” a nivel federal con Peña Nieto, se vio acompañado por múltiples casos de defraudación, malversación y lavado de dinero entre gobernadores como Juan Sabines (Chiapas), César y Javier Duarte (Chihuahua y Veracruz), Tomás Yarrington (Tamaulipas) y Guillermo Padrés (Sonora), entre otros, donde las autoridades municipales, tanto alcaldes, como otros funcionarios fueron igualmente evidenciados como eslabones de cadenas complejas de corrupción en distintas entidades federativas, como fue en el caso de San Luis Potosí y Querétaro (Méndez, 2020).

Casos como el de los manglares de “Tajamar” impactaron nacionalmente al reconocer la venta de riquezas de todos los mexicanos a intereses privados (Cancún, Quintana Roo), donde la comunidad se unió para defenderse ante las arbitrariedades y accionar corrupto de sus autoridades.

El clímax llegó cuando los nuevos avances en combate a la corrupción terminaron por destapar una gestión gubernamental altamente corrupta en todos los niveles de gobierno, donde la Auditoría Superior de la Federación (ASF) presentó para 2017 más de 135 denuncias penales ante la PGR por irregularidades en el manejo del dinero público, logrando que esta última procesara a casi dos mil funcionarios federales, logrando también que el SAT boletinara a más de 3,780 empresas fantasma (Vieyra, 2018), dando como resultado que para 2018 se publicara una revisión de los gobiernos estatales, donde más del 10% de los 129 mandatarios en funciones entre el año 2000 y 2018 habían sido acusados formalmente por algún acto de corrupción.

2.3. La consolidación de regiones más sensibles al problema de la corrupción

Queda en claro que, al menos, los tres años inmediatos anteriores al proceso electoral de 2018 estuvieron marcados por un proceso de proliferación de la percepción de la corrupción entre la sociedad mexicana, donde la masa de votantes, que de suyo se encuentra distribuida de manera desproporcional, concentrada en las principales zonas metropolitanas del país, también se vio expuesta de manera diferenciada a estos fenómenos según la región en la que habitaron y donde desempeñaron su actividad económica durante dicho periodo.

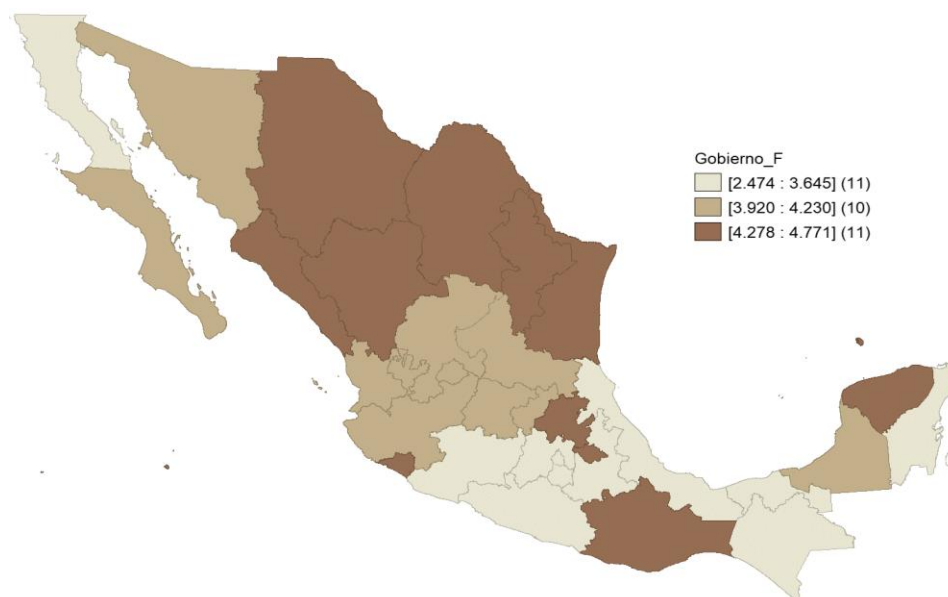
De esta forma, la percepción de la corrupción y la confianza en las distintas instituciones políticas y de gobierno pudo verse afectada por la proximidad de los votantes con el desempeño de sus autoridades directas, locales y estatales, siendo un tema de mayor

relevancia al momento de expresar su afinidad o rechazo a los grupos políticos en el poder cuanto mayor fue la cercanía de la población a los actos de corrupción y mayor fue la escala de dichos actos.

En términos generales, los resultados de la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental (ENCIG, 2017) mostraban que previo al proceso electoral de 2018, los mexicanos desconfiaban altamente de las autoridades e instituciones de carácter político y gubernamental, siendo los agentes económicos peor evaluados entre los ciudadanos encuestados obteniendo puntuaciones de confianza no mayores a los 4.3 sobre 10, como promedio nacional, lo que las dejó como las instituciones menos confiables para el año 2017, en donde cada entidad federativa mostró su propia evaluación de confianza y rechazo a los distintos tipos de instituciones.

La visualización georreferenciada de los principales componentes e indicadores de la ENCIG (2017) permite observar una tendencia en la regionalización de la confianza de la población en las principales instituciones políticas y gubernamentales del país. Los mapas 1 y 2, por ejemplo, muestran el grado de confianza que la población le tiene al gobierno federal y estatal para el periodo de 2017, donde predomina cierta estructura común entre ambos, donde las entidades federativas al norte del país tienden a confiar un poco más en las instituciones gubernamentales y a confiar menos conforme las poblaciones se encuentran más cercanas a la frontera sur del país, siendo que en todos los casos el nivel de confianza es mínimo.

Mapa 1: Heterogeneidad espacial de la confianza institucional en el Gobierno Federal

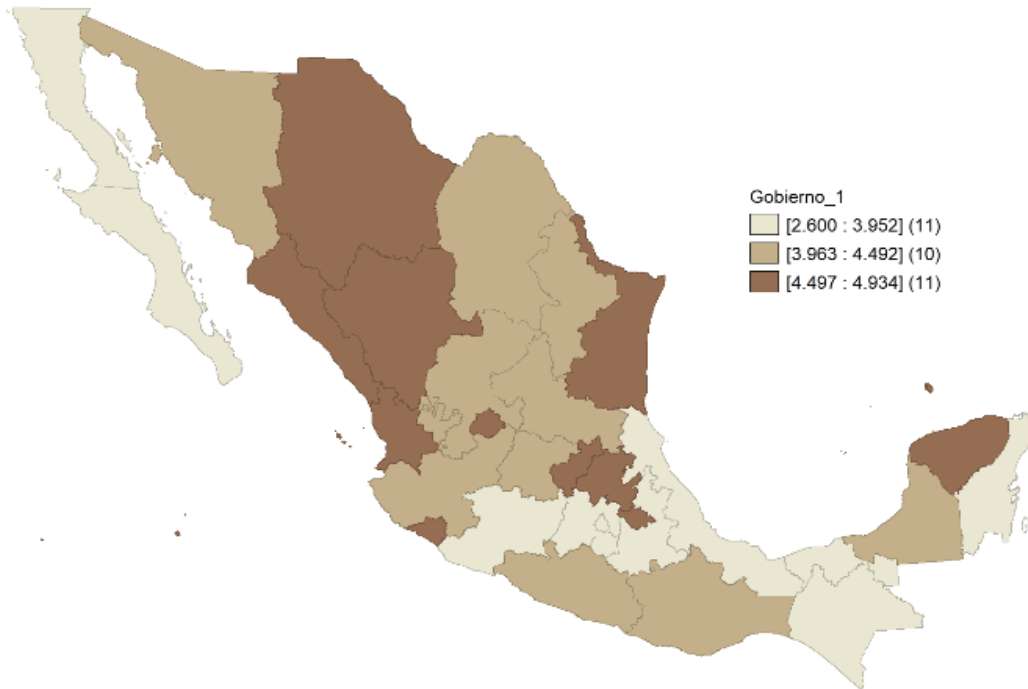


Fuente: Elaborado con información de la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental (ENCIG, 2017).

La confianza de la población en el gobierno federal y estatal es muy baja, sin rebasar un nivel de 5 sobre 10 para ninguna de ambas instituciones, siendo de las instituciones menos confiables para los mexicanos, no obstante, la confianza baja aún más cuando las autoridades

del poder ejecutivo estatal o sus funcionarios se han encontrado en un contexto de investigación o juicio por algún acto de corrupción reciente, como fueron los casos de Jorge Torres en Coahuila, Rodrigo Mena en Nuevo León y Gabino Cué en Oaxaca.

Mapa 2: Heterogeneidad espacial de la confianza institucional en el Gobierno Estatal

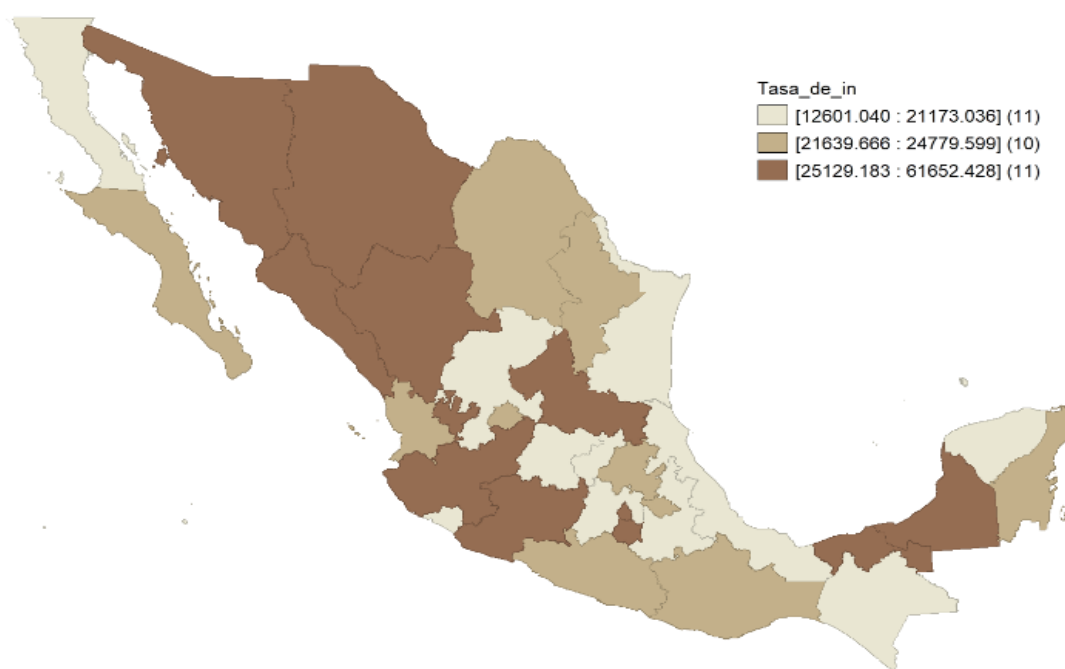


Fuente: Elaborado con información de la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental (ENCIG, 2017).

Durante 2017 predominó la desconfianza en las autoridades federales, locales y en general en los actores públicos, partidos políticos, agudizada incluso por la apreciación social de la inacción del gobierno y los partidos durante la crisis de los sismos de finales de 2017, donde la acción civil organizada se movilizó para el apoyo a la población afectada al sureste y centro del país. En este contexto la desconfianza en los partidos promedió niveles de 3.9 y 3.4 respectivamente, siendo las instituciones juzgadas socialmente como precursoras de los mayores niveles de corrupción.

Otro indicador relevante resulta la tasa de incidencia de la corrupción, la cual indica qué tan próxima se encuentra la población a los actos de corrupción en general al interior de su comunidad, la cual mostró que durante 2017 se presentó cierta correlación espacial entre las regiones sujetas a mayores niveles de percepción de la corrupción y su respectivo acompañamiento con menores niveles de confianza en la autoridad.

Mapa 3: Heterogeneidad espacial de la percepción de la corrupción (tasa de incidencia)



Fuente: Elaborado con información de la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental (ENCIG, 2017).

Si bien la presencia de actos de corrupción y la desconfianza en la autoridad pública y política se encuentran correlacionadas, la primera se encuentra sujeta a cambios bruscos entre las distintas regiones y entidades federativas, fluctuando entre rangos de alcance mucho más amplios que las variaciones de la confianza institucional, por lo que se puede argumentar una sensibilidad diferenciada entre las regiones, no sólo ante actos de corrupción de alto impacto en las altas esferas de gobierno, sino a la presencia de corrupción sistémica en los sistemas de gobierno locales, las mecánicas tradicionales para el desarrollo de los negocios y la vida diaria de la comunidad, mermando la confianza del votante y profundizando su inconformidad.

3. Análisis econométrico espacial de la intención del voto 2018

Basado en el hecho socialmente aceptado de que la corrupción puede ser entendida económicamente como un mal público y que en palabras de Soto (2003) “reduce la efectividad y calidad de las políticas económicas y la calidad de las mismas, distorsiona el diseño y la aplicación de las regulaciones, entraba y ensucia el accionar de la justicia”, se puede entender en el contexto de los procesos electorales como un mal que afecta e incomoda a la sociedad y por lo tanto a la masa de votantes, pues genera beneficios privados a costa de pérdidas sociales, donde la transacción en el mercado de la corrupción favorece a los agentes económicos con mayores concentraciones de poder (Rivas y Buendía, 2017a), siendo por tanto una relación inversa entre crecimiento, bienestar y corrupción.

En este contexto, Méndez (2020) plantea un primer modelo exploratorio de la causalidad del voto efectivo hacia la coalición electoral encabezada por Andrés Manuel López Obrador como producto de la interacción de su discurso anticorrupción y el contexto concreto de las distintas regiones del país respecto a actos de alta corrupción entre sus autoridades y la corrupción sistémica que enfrentaron al día a día durante todo el año 2017 y durante al menos, los cuatro años anteriores al proceso electoral.

La relación general para probar en esta investigación, por tanto, es éxito del discurso anticorrupción de AMLO medido en votos efectivos (Ve) como función de la Incidencia de la Corrupción (Ic) y la Confianza en las Instituciones (Ci) políticas y de gobierno durante las elecciones de 2018 (Función 1).

$$Ve = f(Ic, Ci) \quad (1)$$

Para probar dicha relación funcional se seleccionaron las fuentes de información y variables potencialmente viables para el desarrollo de un modelo de econometría espacial, cuya característica común fuera su estimación original desde un enfoque territorial, es decir, de información de carácter Georreferenciado por entidad Federativa abarcando la totalidad nacional para posteriormente procesarlas a través de Sistemas de Información Geográfica.

Los resultados de la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental (ENCIG, 2017) y del Programa de Resultados Electorales del Instituto Nacional Electoral para la elección presidencial de 2018 (INE, 2018) fueron procesados para la estimación econométrica espacial de impacto mediante Mínimos Cuadrados Ordinarios ajustados logarítmicamente (LOG OLS), indicando estimadores estadísticamente significativos, permitiendo homologar la dimensión del análisis a sus variaciones permitiendo reducir el impacto de la discrepancia entre las tasas, los votos y los índices dentro de un modelo unificado (Función 2).

$$VF = \beta_0 + \beta_1 Tlc - \beta_2 CIsP - \beta_3 CIle - \beta_4 CIGe - \beta_5 CIGf - \beta_6 CIPp \quad (2)$$

$$S.a: CI \in \{0,10\}, VF \in \{R: VF \geq 0\}, Tlc \in \{R: Tlc \geq 0\},$$

Donde:

VF = Votos favorables para AMLO en la elección presidencial de 2018.

Tlc = Tasa de incidencia de la corrupción, que opera de manera directa sobre la efectividad del voto.

CI = Son todos los componentes especializados de confianza en instituciones públicas por entidad federativa, que se prevé operen de manera inversa a la efectividad del voto, es decir, que cuanto mayor sea la confianza en las distintas instituciones, menor sería el impacto del discurso anticorrupción.

$CIsP$ = CI en los Servidores públicos

$CIle$ = CI en los Institutos electorales

$CIGe$ = CI en los Gobiernos estatales

$CIGf$ = CI en el Gobierno Federal

$CIPp$ = CI en los Partidos políticos

El modelo logarítmico territorial por Mínimos Cuadrados Ordinarios indica que efectivamente la relación existe y que sus parámetros son estadísticamente significativos, de tal forma que muestra un grado conjunto e individual de vinculación significativa, reveló también que efectivamente existe una relación significativa a nivel territorial entre la consolidación de regiones sujetas a altos niveles de corrupción y de alta desconfianza en los distintos tipos de instituciones políticas y gubernamentales, y que estos a su vez, impactaron de manera real en la magnitud del voto efectivo que el electorado estuvo dispuesto a entregar a la coalición encabezada por AMLO durante las elecciones de 2018 como reacción a su discurso político “anticorrupción”.

El modelo LOG-SARAR se posiciona como el mejor para la estimación de impactos estatales y regionales, mostrando consistencia con el planteamiento inicial del modelo matemático de Méndez (2020), permitiendo ahora concluir con un alto grado de confianza estadística que en general existe un impulso en las preferencias electorales efectivas como producto del acertado manejo del discurso político en el contexto nacional de desconfianza institucional y rechazo a la corrupción política, generando regiones de alto impacto del mensaje político, quien motivó el voto de castigo a los partidos políticos y los niveles de gobierno involucrados en actos de corrupción.

Consideraciones finales

La econometría y más aún la econometría espacial permiten consolidar un sistema formal de corroboración de la sensibilidad de las poblaciones a los mensajes dirigidos, en su caso, el análisis de los resultados de la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental (ENCIG, 2017) y del Programa de Resultados Electorales del Instituto Nacional Electoral (INE, 2018) permiten estimar el impacto del discurso político anticorrupción en la votación favorable para la coalición “Juntos haremos historia” durante la elección presidencial de 2018.

El Análisis Confirmatorio de Datos Espaciales y la estimación de los distintos modelos de Econometría Espacial permitieron demostrar que el grado de aceptación del discurso entre los votantes no solo depende del poder del mensaje transmitido, sino del contexto histórico, territorial, socioeconómico y político en el que los votantes construyen sus preferencias electorales, siendo más o menos sensibles al mismo mensaje de acuerdo con sus condiciones histórico-concretas.

Las relaciones muestran que existe objetivamente un efecto de retroalimentación regional en la configuración del sistema de decisiones de los electores, es decir, que hay regiones donde los votantes fueron más sensibles a aceptar de mejor manera el discurso anticorrupción, sobre todo donde se presentaron mayores expresiones de corrupción política y de gobierno, como los casos de corrupción por parte de los ejecutivos estatales y municipales, que fueron de alto impacto mediático los tres años anteriores a la elección.

Las estimaciones también permiten conocer que el discurso anticorrupción (el mensaje) cobró relevancia no sólo por la aversión de la población votante a la corrupción política y de gobierno, sino por la división y contraposición tajante que logró transmitir entre la “estructura de gobierno y de poder” establecido durante las últimas décadas (acompañada con altos niveles de corrupción) y la figura individual del candidato presidencial con

liderazgo político como factor transformador y vía de solución y renovación del sistema entero, que combinado con la confianza de la población votante en las personalidades más que en las instituciones por sus antecedentes históricos caciquiles en gran parte de las regiones del país favoreció en la aceptación del mensaje.

El sistema de evaluación en su conjunto presentado en esta investigación permitirá refinar el diseño de campañas políticas y discursos basados en propuestas, con alto potencial de aceptación territorial por la población votante, donde juega un papel central el análisis econométrico de las condiciones históricas y territoriales concretas de la población receptora del mensaje.

Referencias

Ayala López, José (2015). Apuntes para una historia de la administración electoral, la cultura política y la construcción de ciudadanía en México, 1977-2014, publicado en: *Política, Globalidad y Ciudadanía* Facultad de Ciencias Políticas y Administración Pública, Universidad Autónoma de Nuevo León Vol. 1. Núm. 2. Julio-diciembre 2015, pp. 41-58

Banco Mundial (2014-2017) Índice de Gobernabilidad y Buen Gobierno

Crespo, J. A. (2016). Elecciones y Democracia. México: Instituto Nacional Electoral (INE).

INEGI (2017) Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental (ENCIG)

Estrada Rodríguez, José. (2013). La corrupción administrativa en México. Madrid. Recuperado de: http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1870-23332013000200007

Forbes. (junio-2019). Bukele arrebató primer lugar a AMLO como el mejor evaluado en América. Recuperado de: <https://www.forbes.com.mx/bukele-arrebata-primer-lugar-a-amlo-como-el-mejor-evaluado-en-america/>

Instituto Nacional Electoral (INE) (2018) Programa de Resultados Electorales del Instituto Nacional Electoral para la elección presidencial de 2018 <http://www.ine.mx/>

Méndez Nájera, Raúl A. (2020) Percepción de la corrupción y elección pública. Tesis de licenciatura, Facultad de Economía de la UNAM. México

Mirón Lince, Rosa M. (2011), El PRI y la transición política en México, México, D.F. UNAM, Facultad de Ciencias Políticas y Sociales

Page, O. (2018). Corrupción institucional. Recuperado de: <https://scielo.conicyt.cl/>, 9-19.

Pérez Pineda, J. A. (2006). Econometría espacial y ciencia regional. Investigación Económica, 129-160.

Plan Nacional de Desarrollo (2019-2024). Gaceta Parlamentaria, México, 2019. Disponible en: <http://gaceta.diputados.gob.mx/PDF/64/2019/abr/20190430-XVIII-1.pdf>

Quintana Romero, L., & Mendoza, M. A. (2020). Econometría Aplicada Utilizando R. Ciudad de México: Universidad Nacional Autónoma de México.

Reta Martínez, Carlos. (2017). Consideraciones sobre corrupción y corrupción administrativa. Madrid. Recuperado de: <https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/9/4315/11.pdf>

Rivas, Jorge Pablo (2012). Propuesta metodológica para un sistema de control y evaluación del desarrollo urbano sustentable (tesis de maestría). Facultad de Economía, Universidad Nacional Autónoma de México.

Rivas, Jorge P. y Buendía, Rafael (2017a). Costos y consecuencias de la corrupción en México. Centro de Estudios de las Finanzas Públicas. Cámara de Diputados.

Rivas, Jorge P. y Buendía, Rafael (2017b) El costo de la democracia y participación social en México. Centro de Estudios de las Finanzas Públicas. Cámara de Diputados.

Sartori, G. (1993). ¿Qué es la democracia? México. Instituto de Investigaciones Jurídicas.

Soto, R. (2003). La Corrupción desde una perspectiva económica. Santiago: Instituto de Economía P.U.C. Obtenido de https://www.flacsoandes.edu.ec/web/imagesFTP/1275931953.raimundo_soto.pdf

Transparencia Internacional (2014) Barómetro Global de Corrupción

Transparencia Internacional (2014-2017) Índice Global de corrupción

Transparencia Internacional, Índice de Percepción de la Corrupción

Ugalde Luis Carlos, ¿Por qué más Democracia significa más corrupción?, Nexos [versión electrónica], febrero 2015, <https://www.nexos.com.mx/?p=24049>

